

FÉLIX LUNA

LOS

GOLPES

MILITARES



DE LA DICTADURA DE URIBURU
AL TERRORISMO DE ESTADO
(1930-1983)

FÉLIX LUNA

LOS GOLPES MILITARES

DE LA DICTADURA DE URIBURU
AL TERRORISMO DE ESTADO
(1930-1983)

 Planeta

EL BALANCE DE LOS GOLPES



De estas reseñas de los golpes militares que afligieron al país desde 1930 caben señalar algunas reflexiones muy sintéticas.

En primer lugar, hay que destacar que estas infracciones al orden constitucional estuvieron generalmente rodeadas de un cierto apoyo de la opinión pública. O hubo sectores civiles que los alentaron previamente o existió una adhesión posterior. Nunca se produjeron sin algún tipo de aliento civil.

En segundo lugar, llama la atención que, salvo el caso de la revolución de 1943, que tres años más tarde entregó el poder constitucional a uno de los suyos, los gobiernos militares no

podieron instrumentar políticamente una secuela afín a sus propósitos.

Es notable, también, la creciente “ilegalidad” de los regímenes de facto. Así, la dictadura de Uriburu se limitó, al menos en las palabras, a los atributos que tradicionalmente ejercía el poder Ejecutivo; los golpes posteriores, en cambio, funcionaron basándose en “decretos-leyes” y sustituyeron a los integrantes de la Corte Suprema.

Otro aspecto de interés tiene que ver con una suerte de “política-ficción”. Analizando los factores que operaban previamente a los golpes militares, se advierte que cierta flexibilización del poder civil acaso los hubiera evitado. De modo que la incapacidad de rectificación del poder civil se vio compensada, por así decirlo, con la decisión militar de llevar adelante el golpe.

Finalmente habría que registrar el hecho de que los golpes militares ocurrieron dentro de una circunstancia de descreimiento generalizado en la democracia. O no se la consideraba apta para que el Estado llenara sus fines (1930) o estaba viciada por el fraude (1943) o por el despotismo (1955) o por la supuesta ineficacia funcional (1966) o por la violencia (1976). En todo caso, en esos momentos, no solo las Fuerzas Armadas sino gran parte de la opinión pública había perdido la fe en la democracia.

Estas reflexiones, que apenas se dejan sugeridas aquí, son útiles para entender mejor la triste secuencia de los golpes militares que, felizmente, se ha clausurado, aparentemente para siempre, con el retorno a la democracia acaecido en 1983.

F. L.

LA DICTADURA DE URIBURU

La tremenda decisión de interrumpir el proceso democrático ha sido analizada por los historiadores, y aun por algunos de sus protagonistas, como una catástrofe institucional. Nadie tuvo la fortaleza cívica de proponer que los errores del partido gobernante fueran corregidos mediante los mecanismos republicanos. Se creó una atmósfera proclive al derrocamiento de Yrigoyen, exagerando las fallas de su administración, describiendo al presidente como un anciano incapaz o pintándolo como un tirano.



Los responsables fueron aquellos que adherían a las ideologías autoritarias que comenzaban a circular por el mundo, y también sinceros patriotas, convencidos de que el golpe militar era indispensable para evitar que el país se hundiera definitivamente.

El episodio inauguró medio siglo de inestabilidad institucional e inició la costumbre de ciertos sectores civiles de recurrir a los militares cada vez que se presentó una crisis de difícil resolución en el marco constitucional. También las Fuerzas Armadas se constituyeron en una fuerza de reserva, encargada de salir a la calle cada vez que los civiles no podían resolver una situación crítica.

Las memorias de algunos participantes de la conspiración, como el general José María Sarobe —que incluyen un extenso aporte del entonces capitán Juan Perón—, han servido para esclarecer los pasos que se fueron dando hacia el derrocamiento de Yrigoyen. Su jefe, el teniente general José Félix Uriburu, había sido inspector general del Ejército y estaba retirado desde hacía dos años. Diputado conservador en 1914, admiraba a Alemania, y desde su retiro del servicio activo se había rodeado de grupos juveniles de inspiración fascista. Uno de ellos, Carlos Ibarguren, cuenta en sus memorias que el plan de Uriburu era «hacer una revolución verdadera, que cambie muchos aspectos de nuestro régimen constitucional, modifique la Constitución

y evite el imperio de la demagogia que hoy nos desquicia». Y Uriburu agregaba: «No haré un motín para cambiar hombres en el gobierno, sino un levantamiento trascendental y constructivo, con prescindencia de los partidos».

Sin embargo, Lisandro de la Torre, amigo personal de Uriburu a través de años de tertulias en el Jockey Club, relató pocos años después de los hechos que el militar lo invitó a participar «en una revolución que preparaba con el fin de deponer al presidente Yrigoyen, reformar la Constitución, reemplazar el Congreso por una entidad gremial y derogar la ley Sáenz Peña». Según el dirigente demoprogresista, el jefe del



*José F. Uriburu y Agustín P. Justo
en maniobras en Campo de Mayo.*

movimiento «proyectaba la implantación de una dictadura y asumiría el título de dictador».

Las ideas de Uriburu eran absolutamente fascistas. No obstante, los partidos opositores, conscientes o no del pensamiento corporativista y antidemocrático del militar, colaboraron activamente en la creación de la atmósfera propicia al golpe. El 9 de agosto de 1930 los diputados socialistas independientes, los conservadores y, días después, los antipersonalistas se constituyen como grupo político para agitar el ambiente y denunciar la crisis institucional, la crisis económica y la falta de obra positiva por parte del gobierno. Con esta intención habrían de «coordinar la acción opositora fuera de las Cámaras en todos los distritos, para difundir en el pueblo y ante el electorado el conocimiento de los actos ilegales del Poder Ejecutivo». Las palabras del diputado del socialismo independiente, Antonio de Tomaso, planteaban solo dos alternativas: la renuncia del presidente o la violencia...

LOS ÚLTIMOS DÍAS

La solución apareció de modo impensado: Yrigoyen contrajo gripe y la enfermedad se usó como excusa para la delegación del mando. El vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo decretó el estado de sitio en la Capital Federal por treinta días y dejó entrever que se suspenderían las cuestionadas elecciones en Mendoza y San Juan, previstas para el día 8. Estas decisiones satisfacían los reclamos de la oposición: Yrigoyen dejaba la presidencia, en Cuyo se postergaba la definición política, el Congreso iniciaría las sesiones ordinarias el día

11. También podía preverse que Martínez formara un nuevo gabinete. Sin embargo, la oposición había probado hasta dónde llegaba la debilidad del gobierno. Ninguna solución parcial contentaba a los conspiradores. No podían ni querían detenerse. El 2 de septiembre, *La Razón* afirmaba: «Nadie ignora que la revolución, si no está como idea en todos los corazones, está como tema en todos lados». Y *Crítica* aguzaba todavía más sus armas: «La situación es una bomba que no tardará en estallar».

Al día siguiente, el 3, los estudiantes universitarios recorren en manifestación las calles de la ciudad y piden la renuncia del presidente. Alfredo Palacios apoya estas exigencias, y el día 4, en un tiroteo con la policía, cae muerto un joven empleado bancario, que rápidamente se convierte en mártir: ya no queda sino la revolución.

Mientras tanto, Uriburu continuaba preparándose, y el general Justo se acercaba a la conspiración, rodeado de sus amigos del Ejército. Su presencia significaba ciertos recortes en las intenciones dictatoriales del general Uriburu, y en principio se sabe que exigió la modificación del manifiesto inicial, redactado por Leopoldo Lugones. El apoyo de Justo hizo que las cosas se precipitaran también para los complotados; Uriburu fijó entonces el sábado 6 de septiembre como fecha para el golpe. Los momentos eran muy difíciles, y casi todos cayeron en la confusión. Dos voces se oyeron en medio de tanta mezquindad y tanta mentira. Una fue la del único diputado socialista, Nicolás Repetto, que a fines de agosto previno en la Cámara sobre los peligros de una dictadura. La otra, la del jurista Alfredo Colmo, que el 4 de septiembre publicó en *La Nación* una nota llena de serenidad. En ella se aceptaban

algunos de los cargos que se formulaban al gobierno, pero se añadía que «la mala situación del país no es obra» de aquel. «La dictadura de que se pretende hablar es una superchería», y advertía acerca de la amplísima libertad de que podía gozar el ciudadano. Una dramática advertencia resonaría muchos años después: «La revolución nos arrojaría varias décadas atrás». Aunque las ideas de Colmo eran muy sensatas, la revolución ya estaba decidida.

La conspiración y sus fuerzas políticas

Las fuerzas conservadoras, desalojadas en 1916 del poder (el «régimen falaz y descreído» a que hacía alusión el líder radical en oposición a su «causa»), no supieron aceptar la derrota con la caballerosidad que desplegaban en otros terrenos: la vida social, la esgrima. Su actitud fue de oposición y crítica feroces, buscando ampliar sus alianzas políticas en campos afines, cuando no intentando golpear en las puertas de algunos militares caracterizados. No nos parece casual, por ejemplo, que el ejecutor visible del golpe del 6 de septiembre, teniente general José F. Uriburu, fuera unos años antes diputado conservador por su provincia, aunque llegase a descreer de «los políticos». Siempre habría un Justo a mano para seguir maniobrando.

[...] La campaña opositora no hubiera podido llevarse a cabo con tanta intensidad de no haber contado con «la adhesión de la prensa responsable», que le brindó difusión inusitada. Al frente de los diarios que incitaban abiertamente al cambio violento del régimen hay que colocar al vespertino *Crítica*, dirigido por Natalio Botana, que servía de enlace entre los sectores políticos del golpe y los grupos militares. A esta agitación también se prestaron, y es justo reconocerlo,

numerosos contingentes estudiantiles agrupados en la Federación Universitaria, con los que mantenían contactos frecuentes los políticos, a través de hombres como Roberto J. Noble, diputado socialista independiente, con dirigentes estudiantiles como Raúl Uranga (Derecho), que acuñaría un agravio célebre al calificar a Yrigoyen de «caudillo bárbaro y senil». Muchos años después, cruzado el Jordán, Uranga sería elegido gobernador de la provincia de Entre Ríos en los comicios del 23 de febrero de 1958, y no desdeñó sentirse continuador de la auténtica tradición radical. Afición esta que perdura hasta nuestros días.

Pero la conjura abarcaba todos los centros posibles, mientras el Senado controlado por la oposición demoraba visiblemente la consideración del proyecto de ley de nacionalización del petróleo, aprobado en 1927 por Diputados. A ello no eran ajenos los intereses petroleros imperialistas, que Enrique Mosconi había sabido denunciar con valentía. Una campaña internacional difundió por todo el país el nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y su sigla cortante YPF, y se corría el peligro de que las próximas elecciones en Mendoza y San Juan (fijadas para el 7 de septiembre de 1930) alterasen el equilibrio numérico en el Parlamento y se llegase por fin a aprobar el postergado despacho. Claro que los opositores tenían tiempo para reunirse a conspirar, como ocurrió el 5 de septiembre, en la sede de la presidencia de la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, por lo que después no cabría extrañeza alguna ante el reconocimiento de la Corte Suprema de la Nación [...] O para organizar silbatinas y tumultos en la Sociedad Rural Argentina, con motivo de inaugurarse el tradicional certamen ganadero (28 de agosto de 1930), de los que fue víctima el ministro de Agricultura Fleitas.

Alberto Ciria

Partidos y poder en la Argentina moderna 1930-46

EL DÍA QUE SE QUEBRARON LAS INSTITUCIONES

La noche del 5 de septiembre, un grupo de diputados opositores se reunió en la casa de Manuel Fresco, en Haedo. En la madrugada del día 6 se dirigieron a la base aérea de El Palomar. Uriburu, vistiendo su uniforme, salió de su refugio y entró en el Colegio Militar. Todo estaba perfectamente sincronizado: cuando los aviones de El Palomar sobrevolaron la ciudad arrojando volantes, la sirena de *Crítica* anunció la revolución. Pero Uriburu solo contaba con los cadetes del Colegio Militar; la guarnición de Campo de Mayo se negó a sublevarse y solo una sección de Comunicaciones se plegó al movimiento. No obstante, con la seguridad de que ningún militar tiraría sobre los jóvenes alumnos del Colegio, el jefe de la revolución ordenó emprender la marcha sobre Buenos Aires.

En la Casa Rosada la situación era insostenible. Martínez no pudo formalizar una reunión de gabinete y todo terminó en discusiones y acusaciones. El vicepresidente a cargo no podía imponerse a su propio nerviosismo, y aunque algunos ministros y dirigentes partidarios lo instaron a impartir órdenes para detener la columna rebelde, optó por la pasividad. Mientras tanto la expedición avanzaba, entraba en la Capital, tomaba Rivadavia y luego Gaona para continuar por Córdoba y Callao hacia la Plaza de Mayo. Al llegar a la Plaza del Congreso hubo un tiroteo que provocó unas pocas bajas. Una eufórica multitud acompañó el trayecto de los insurrectos gritando invectivas contra «el Peludo» y viviendo a «los salvadores de la Patria».

Entre las 17 y las 18, Yrigoyen, enfermo, salía de su casa en compañía de Horacio Oyhanarte y se encaminaba en auto hacia

La Plata. Casi al mismo tiempo llegaba Uriburu a la sede de gobierno. Lo había precedido una multitud heterogénea que, sin la menor dificultad, ocupó salones y pasillos. En la Casa Rosada solo quedaban el vicepresidente, el ministro de Obras Públicas, José Benjamín Ábalos, el teniente coronel Gregorio Pomar, edecán presidencial, y unos pocos funcionarios. Con tono terminante, Uriburu le exigió al vicepresidente su renuncia.

La negativa llevó a una discusión en términos muy ásperos, hasta que en algún momento Uriburu desenfundó un revólver para poner orden en la confusión reinante. Finalmente, a instancias de Matías Sánchez Sorondo, el vicepresidente firmó un breve texto que se improvisó allí mismo.

Mientras tanto, Yrigoyen había llegado al despacho del gobernador de Buenos Aires, Nereo Crovetto, y desde allí se había comunicado telefónicamente con el Regimiento 7. El jefe le notificó que tenía orden de Uriburu para que el presidente entregara su renuncia. Yrigoyen se trasladó al cuartel, firmó una dimisión dirigida al jefe del regimiento y luego solicitó descansar allí, pues —dijo— estaba enfermo y no tenía dónde ir. Las turbas habían saqueado su modesta vivienda e incendiado el Comité Nacional de la UCR, el diario *La Época* y algunos locales radicales. El destinatario de las esperanzas reflejadas en las cifras de 1928 había sido difamado y derrocado sin piedad alguna.

LA DICTADURA

No solamente la supresión de las instituciones marcó la historia argentina en 1930: también la represión signó los diecisiete meses del gobierno de Uriburu. Torturas, fusilamientos,

exoneración de jueces, clausura de diarios. Cientos de ciudadanos fueron detenidos, despedidos de sus empleos y llevados a la cárcel de Ushuaia por el delito de ser opositores.

El 10 de septiembre, recién impuesta la ley marcial, fue fusilado en Rosario el obrero catalán Joaquín Penina, por orden del capitán Luis Sarmiento: se lo acusaba de haber mimeografiado un volante contra Uriburu. Dos años después, en San Juan, el capitán Sarmiento fue asesinado por dos desconocidos. El 1 y el 2 de febrero de 1931, respectivamente, fueron fusilados en la Penitenciaría Nacional los anarquistas Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó. El fusilamiento fue precedido por un juicio militar sumario en el que el defensor de oficio, teniente primero Franco, cuestionó la facultad que se atribuía el tribunal castrense de aplicar la pena de muerte, eliminada por el Código Penal desde 1921. Di Giovanni era el símbolo del sector anarquista que propugnaba la lucha armada, y su experiencia en atentados y actos «expropiadores» lo colocaba en el ojo de la tormenta. El teniente Franco sufrió las consecuencias de haber defendido la legalidad: fue arrestado y posteriormente dado de baja del Ejército. Pocos días antes otro anarquista, Pedro Iscazatti, había sido fusilado en Mendoza.

La aplicación de torturas socavó la confianza que algunos pudieran haber tenido en Uriburu, si bien él quiso deslindar responsabilidades, alegando que se encontraba en Salta cuando se produjeron los casos más resonantes. La intolerancia ante los opositores respondía claramente al propósito de gobernar con mano dura, y el régimen de Uriburu tuvo el triste privilegio de ser el primero bajo el cual se aplicaron sistemáticamente torturas brutales, abriendo una línea de conducta que desgraciadamente persistió en muchos períodos posteriores.

LA POLÍTICA

Uriburu juró su cargo de presidente provisional el 8 de septiembre, ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo. Si los jóvenes que lo habían rodeado en las jornadas previas creyeron en una renovación de ideas tanto como de hombres, seguramente se desengañaron al conocer los nombres de quienes iban a secundar al dictador. Era el patriciado conservador que volvía en pleno, la restauración del *ancien régime* desplazado en 1916 por el voto popular. Los ministros del gobierno de facto fueron Matías G. Sánchez Sorondo, Ernesto Bosch, Enrique S. Pérez, Horacio Bécarr Varela y Octavio Pico, además de los titulares de las carteras militares, general Francisco Medina y almirante Abel Renard. «Eran gente adinerada, ganaderos de la pampa húmeda, azucareros de Tucumán, banqueros, jueces, profesores y letrados de empresas extranacionales», dice Horacio Sanguinetti en *La democracia ficta*. Igual perfil mostraban los interventores federales designados en doce provincias y los funcionarios que habían sido nombrados en diversas reparticiones.

Previsiblemente, Uriburu, cuyo proyecto corporativo excluía de entrada a los políticos —varias veces dijo en sus discursos «la política es mala palabra»—, se rodeó de los más extremados conservadores. Estos, deshechos como partido tras la Ley Sáenz Peña, habían demostrado su ineptitud para ejercer otras formas políticas que no fueran la infiltración y la división de las fuerzas adversarias, el ataque ensañado y la intriga de cenáculo. Con sutil estrategia, dejaron que Uriburu esbozara su Estado corporativo y se deshiciera de los políticos, para finalmente neutralizarlo.



*Uriburu en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno
el 15 de septiembre de 1930.*

El mismo día de la asunción se desencadenaron tiroteos entre la Casa de Gobierno y el palacio de Correos; un intento subversivo probablemente auspiciado por algunos grupos yrigoyenistas. Por la noche, el general Uriburu, como precaución ante futuros levantamientos, ofreció el cargo de comandante en jefe del Ejército al general Justo. Este, que tenía otras aspiraciones, solo desempeñó el cargo por unos pocos días, hasta el 24, probablemente para no aparecer como excesivamente complaciente con las decisiones del gobierno. Sin embargo, su pedido de relevo fue interpretado como un renunciamento.

Dos testimonios sobre el golpe

José Aguirre Cámara, dirigente conservador y diputado nacional por Córdoba en 1930 declaró ante el Comité Nacional del Partido Demócrata Nacional, el 31 de julio de 1946: «Nosotros contribuimos a reabrir en 1930 en el país la era de los cuartelazos victoriosos. El año 1930, para salvar al país del desorden y del desgobierno, no necesitamos sacar a las tropas de los cuarteles y enseñar al Ejército el peligroso camino de los golpes de estado. Pudimos, dentro de la ley, resolver la crisis: no lo hicimos, apartándonos de las grandes enseñanzas de los próceres conservadores, por precipitación, por incontinencia partidaria, por olvido de las lecciones de la experiencia histórica, por sensualidad de poder...».

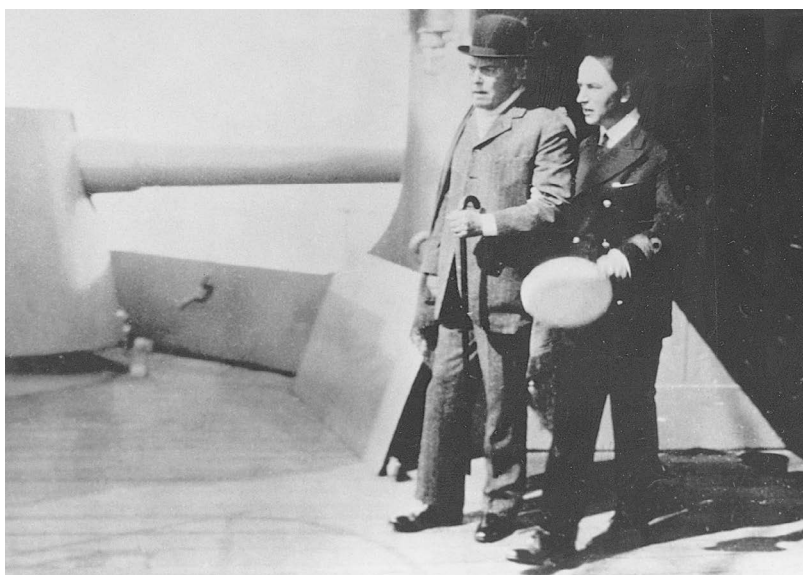
Juan Perón, en su discurso del 9 de abril de 1953 expresó: «Yo recuerdo que el presidente Yrigoyen fue el primer presidente argentino que defendió al pueblo, el primero que enfrentó a las fuerzas extranjeras y nacionales de la oligarquía para defender a su pueblo. Y lo he visto caer ignominiosamente por la calumnia y los rumores. Yo, en esa época, era un joven y estaba contra Yrigoyen porque hasta mí habían llegado los rumores y no había nadie que los desmintiera y dijera la verdad».

Félix Luna
Yrigoyen

El 1º de octubre Uriburu lanzó un manifiesto que auspiciaba reformas profundas a la Constitución, al que siguió un discurso de corte netamente corporativo del interventor en Córdoba, doctor Carlos Ibarguren. Ese discurso, pronunciado el 15 de octubre de 1930 en el teatro Rivera Indarte de la

ciudad de Córdoba, apoyó el plan de Uriburu. La Federación Nacional Democrática (organismo coordinador de los partidos conservadores de varias provincias, del socialismo independiente, del radicalismo antipersonalista de Entre Ríos y de grupos menores) respondió con un acto en el mismo escenario, el 25 de octubre, donde se insistía en «volver cuanto antes a la normalidad» y en el llamado a elecciones. Los oradores fueron, entre otros, Antonio de Tomaso, Miguel A. Cárcano y Rodolfo Moreno.

La Unión Cívica Radical parecía incapaz de reaccionar. Muchos dirigentes se habían exiliado; algunos estaban en prisión; entre ellos, el expresidente Yrigoyen, quien, después de pasar un par de meses detenido en un buque de guerra anclado en el Río de la Plata, fue confinado en la isla Martín García en condiciones relativamente confortables.



*Hipólito Yrigoyen subiendo al buque
que lo trasladará a la isla Martín García.*

En noviembre la juventud radical logró llevar a cabo en Rosario una asamblea nacional donde se ratificaron los principios partidarios; era el comienzo de una reorganización todavía muy difícil de concretar. La actitud de Alvear, que en París había aplaudido sin pudor la revolución de septiembre, no contribuyó a sosegar a los exaltados radicales. Solamente cuando fue perfilándose con mayor claridad el proyecto profascista y opresor del gobierno de facto, el partido derrocado comenzó a reunir fuerzas y, en defensa propia, se dispuso a impedir los planes de Uriburu.

Aunque inicialmente habían apoyado el golpe militar, las restantes fuerzas —tanto los socialistas como el líder demócrata progresista De la Torre— manifestaron su discrepancia con las iniciativas corporativas. El dirigente santafesino trató de disuadir a Uriburu de llevarlas adelante, no obstante lo cual a principios de noviembre se anunció el nacimiento de un «Partido Nacional», organización de la que se valdría Uriburu para imponer su proyecto, con el apoyo de otras agrupaciones cívicas o sin él.

Un documento de consecuencias peligrosas

Texto de la acordada producida por los ministros de la Corte Suprema de Justicia, José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna y el procurador general de la nación Horacio Rodríguez Larreta, el 10 de septiembre de 1930.

Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación y, por consiguiente, para proteger la libertad, la

vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes fundamentales del país, en el ejercicio del poder.

Que tales antecedentes caracterizan, sin duda, un gobierno de hecho en cuanto a su constitución y de cuya naturaleza participan los funcionarios que lo integran actualmente o que se designen en lo sucesivo, con todas las consecuencias de la doctrina de los gobiernos de facto, respecto de la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él.

Que esta Corte ha declarado, respecto de los funcionarios de hecho, «que la doctrina constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razón de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados, ya que no sería posible a estos últimos realizar investigaciones al discutir la legalidad de las designaciones de funcionarios que se hallan en aparente posesión de sus poderes y funciones» [...]

Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es, pues, un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social.

Que ello no obstante, si normalizada la situación, en el desenvolvimiento de la acción de gobierno de facto, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la administración de justicia encargada de hacer cumplir estas las restablecería en las mismas condiciones y con el mismo alcance que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de derecho.

Y esta última conclusión, impuesta por la propia organización del poder judicial, se halla confirmada, en el caso, por las declaraciones del gobierno provisional, que, al asumir el cargo, se han apresurado a prestar juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes fundamentales de la nación, decisión que comporta la consecuencia de hallarse dispuesto a prestar el auxilio de la fuerza de que dispone para obtener el cumplimiento de las sentencias judiciales.

EL 5 DE ABRIL

El ministro del Interior no desechaba la posibilidad de utilizar las elecciones como un medio de imponerse, con visos de legitimidad, en algunas provincias. Sánchez Sorondo consideraba conveniente aprovechar la desmoralización de los radicales para ganar algunos gobiernos locales y, sobre esa base, estructurar los futuros acuerdos con vistas a la salida electoral definitiva.

La idea de realizar la primera elección en Buenos Aires respondía a fundamentos acertados: el conservadorismo era allí tradicionalmente fuerte, ya que se asentaba en un núcleo de poderosos estancieros y contaba con una vanguardia de dirigentes prestigiosos como Manuel Fresco, Daniel Videla Dorna, Juan G. Kaiser y otros. Antonio Santamarina, un hacendado del centro de la provincia, fue el candidato conservador. Los radicales lograron aunarse en una fórmula cuyos nombres sintetizaban las dos corrientes en que se había dividido el partido en los años anteriores: Pueyrredón, «el canciller de Ginebra», yrigoyenista, y Mario M. Guido, dirigente

de Bahía Blanca, que había militado en el antipersonalismo. Empero, la aceptación de estas candidaturas fue condicionada al apoyo que el radicalismo de todo el país debía prestar a los correligionarios bonaerenses. La aprobación se logró y, bajo la conducción de Juan O'Farrell, los radicales de Buenos Aires pusieron todas sus fuerzas en preparar la campaña.

El 5 de abril se votó en la provincia. Se cuenta que ese domingo los comités conservadores estaban repletos de ciudadanos que comían empanadas y recibían las boletas para sufragar. Estaban tocados con la clásica boina colorada, que era el distintivo conservador, en contraposición a la blanca, usada por los radicales. Cuando se fueron conociendo los resultados, a esos votantes se los llamó «rabanitos»: aparentaban tener la cabeza colorada, pero en realidad, si se les sacaba la cáscara, era blanca... Los radicales obtuvieron 218.000 votos; los conservadores, 187.000; la fórmula socialista encabezada por Nicolás Repetto obtuvo una cifra cercana a los 50.000 sufragios.

El escrutinio se realizó a lo largo del mes de abril. Los resultados pusieron de manifiesto el repudio hacia el régimen de Uriburu y dieron pie a que se urdieran los mecanismos del fraude, ya que si en comicios libres la primera provincia del país demostraba que la mayoría seguía siendo radical, era inexcusable que, para negar a esa mayoría el derecho de gobernar, habría que usar métodos ilegales.

La crisis de gabinete no se hizo esperar. El ministro del Interior renunció y el nuevo ministro, Octavio Pico, convocó a una «unión sagrada» y criticó a «las fuerzas depuestas por la revolución, que no se han depurado ni han manifestado propósitos de enmienda». Las elecciones en Santa Fe y en Córdoba fueron suspendidas, mientras se legalizaba la «Legión

Cívica», organización paramilitar que recibía entrenamiento en los cuarteles y que Uriburu había resuelto usar al modo de los *squadristi* de Mussolini.

HACIA LAS ELECCIONES

Por otra parte, los partidos políticos siguen activamente el proceso. En pocas semanas, dos núcleos trabajan activamente para hegemonizar la UCR: los del City Hotel, donde reside Alvear, que agrupa a los yrigoyenistas y a algunos antipersonalistas, y los del Hotel Castelar, donde se reúnen los antipersonalistas, que ven en la candidatura del general Justo la única salida viable. Un mes después, las esperanzas de reunificación del radicalismo han desaparecido definitivamente. Coincide este sentimiento con el decreto de Uriburu del 9 de mayo, que convoca a elecciones generales para el 8 de noviembre con el fin de cubrir los cargos provinciales y de diputados nacionales, y eventualmente extender la convocatoria a la presidencia de la nación, «si las fuerzas cívicas llegaran a una concordancia para la reconstrucción institucional». Uriburu está en un callejón sin salida: no se resigna a entregar el poder a Justo, pero su fuerza no le basta para imponer un candidato propio ni mucho menos para insistir en la reforma de la Constitución.

¿Y qué hacer con los resultados de las elecciones en Buenos Aires? Sin duda hay que anularlos, pero este acto restaría convicción al llamado a futuras elecciones. El panorama social es complejo: huelgas, desocupación, desórdenes en la Universidad intervenida desde 1930. Sin embargo, obstina-

damente, Uriburu se resiste a convocar a elecciones presidenciales.

En julio se produce un movimiento revolucionario liderado por el coronel Gregorio Pomar en Corrientes, que sirve de argumento para encarcelar a la cúpula radical y obligar al exilio de Alvear. Pocas semanas más tarde aparece el decreto que convoca a elecciones presidenciales en noviembre. Mucha gente pensó en ese momento que Pomar había sido engañado por los agentes del general Justo: creyó que su movimiento formaba parte de uno más vasto destinado a destituir a Uriburu y entregar el poder a la Corte Suprema. Y —según esas sospechas— su sacrificio solo habría servido para sobresaltar al dictador y activar el proceso de liquidación del poder de facto. Pues a partir de ese momento, con un radicalismo virtualmente acéfalo, los partidos apresuraron sus trabajos con el objetivo concreto de las elecciones del 8 de noviembre, mientras Uriburu se resignaba a presidir las exequias de sus propios sueños de transformar a la Argentina en un país ordenado por los métodos de la ultraderecha.

Un sucesor para Uriburu

Puesto en la alternativa de sostener un candidato a la futura magistratura de la nación, Uriburu comienza inclinándose por Lisandro de la Torre, a quien concretamente lo hace partícipe de sus intenciones. Pero de la Torre, disgustado con el curso que han tomado los acontecimientos y sabedor de las latentes intenciones corporativistas del dictador, rechaza el ofrecimiento. El buen liberal, acaso el último gran liberal de nuestra historia política, preferirá aceptar una candidatura

de derrota, la de la Alianza Civil con el Partido Socialista, antes que renunciar a su pensamiento. Ello está documentado en un artículo clásico, titulado precisamente “Otra página de historia”. Su antiyrigoyenismo básico lo hace intentar rescatar lo rescatable del movimiento del 6 de setiembre, por sobre las equivocaciones del general Uriburu y sus adláteres, proclamándose su legítimo sucesor. Así lo dice en el discurso de la campaña electoral pronunciado en el teatro Coliseo de Buenos Aires, el 13 de setiembre de 1931: “Nosotros venimos, en verdad, a salvar la revolución, porque somos los intérpretes de su espíritu popular. Venimos a encauzarla arrancando a las urnas un veredicto consagradorio de la voluntad de renovación que latió en los corazones argentinos el 6 de setiembre, ¡hasta en el corazón de los vencidos, no todos insensibles al espantoso caos en que yacía la nación! Venimos a recoger una bandera abandonada por error por el gobierno de la revolución, hecha suya por el pueblo, y a su nombre a restablecer la concordia y la fraternidad desaparecidas de la vida nacional. Queremos realizar la obra que el pueblo esperó el 5 de setiembre. ¿Quién, que no fuera un insensato, pretendería restaurar el régimen depuesto?”.

Pero hay que destacar que Lisandro de la Torre, más allá de la euforia de los discursos de la Alianza, no se engañaba sobre sus posibilidades efectivas. Así lo afirma a su corresponsal doña Elvira Aldao de Díaz, en carta del 22 de octubre de 1933: “Se me ofrecía en realidad una candidatura de derrota. Uriburu no era hombre de retroceder ante ningún exceso, y si alguien sabía bien, era yo, que tanto y tan íntimamente lo conocía. Por eso acepté; porque prestaba un servicio a la opinión civil y democrática, con entero desinterés, y porque complacía a mis viejos amigos de Santa Fe, que veían acrecentadas sus fuerzas electorales al vincularse a un movimiento nacional. Además, yo entendía contraer un compromiso transitorio y volver a mi retiro al término de una campaña que

no iba a durar más que dos meses. Tenía los ojos puestos en el escenario nacional y no vi que el triunfo de los demócratas progresistas en Santa Fe me haría casi imposible abandonarlos a su suerte”.

Alberto Ciria

Partidos y poder en la Argentina moderna, 1930-46

EL COMICIO CERRADO

Una vez desarticulado el radicalismo, se definieron las líneas del oficialismo y de la oposición no radical. El Partido Demócrata Nacional, los antipersonalistas del Castelar y los socialistas independientes constituyeron la «Concordancia» y proclamaron la candidatura de Justo, con dos alternativas vicepresidenciales: Julio A. Roca por los conservadores y José Nicolás Matienzo por los antipersonalistas. Si bien Justo no era el sucesor que Uriburu aprobaba, tenía que reconocer que representaba una cierta garantía para el Ejército, y su condición de ingeniero civil aliviaba la idea de que un militar sucediera a otro militar.

Por su parte, los socialistas y los demócratas progresistas coincidieron en la «Alianza Civil», con Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto como candidatos. Era una fuerza de centro-izquierda cuyas perspectivas electorales dependían de la gran incógnita del momento: la posición del radicalismo.

Las persecuciones e intimidaciones que sufrían los militantes radicales no fueron suficientes: el 25 de septiembre lograron constituir el nuevo Comité Nacional, que en un fervoroso

clima proclamó el binomio Alvear-Güemes. Una semana más tarde, las ilusiones de participación serían aniquiladas por el veto del gobierno a la fórmula radical, a cuyos integrantes declaró «inhabilitados para figurar como candidatos a presidente y vicepresidente de la nación». La medida confirmó la sospecha de que Uriburu no vacilaría en adoptar cualquier recurso para alejar a la UCR de las urnas.

Nuevas alianzas

Mientras los nacionalistas proponían un camino reaccionario pero novedoso, el grueso de la clase política optaba por la defensa de las instituciones constitucionales, pero señalando que estas no habían estado nunca supeditadas a las formas más crudas de la democracia. Por el contrario, existía en el pasado una amplia experiencia acerca de cómo resolver la cuestión electoral y formas, no necesariamente groseras, de mediatizar la voluntad popular. Esta alternativa, que salvaba los principios del liberalismo, fue reclamada desde la sociedad, fue defendida vigorosamente por los principales órganos de opinión, como *La Nación* o *Crítica*, y fue asumida por los partidos políticos que habían constituido la oposición a Yrigoyen. Mientras los socialistas y demoprogresistas pasaron nuevamente a la oposición, los partidos que en 1928 habían apoyado la candidatura de Leopoldo Melo oscilaron entre enfrentar los proyectos autoritarios y corporativistas de Uriburu y utilizar para una eventual elección el apoyo del gobierno; sin duda indispensable para derrotar a los radicales. El primer grupo que se constituyó, la Federación Nacional Democrática, definidamente liberal y enérgicamente opuesta a Uriburu, fue fracturado por el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, menos hostil a la política presidencial, pero su derrota (...) —que clausuró

a la vez los proyectos de regeneración y la ilusión de vencer a los radicales en elecciones limpias— creó las condiciones para un reagrupamiento de las fuerzas, en torno de la ya perfilada candidatura del general Justo. El sector más consistente de la coalición eran los grupos conservadores, que constituyeron el Partido Demócrata Nacional, una coalición heterogénea de partidos provinciales que incluía desde los más tradicionales de Buenos Aires hasta los más liberales de Córdoba o Mendoza. El radicalismo antipersonalista, su competidor en el frente en formación, se había desgranado luego de que muchos retornaran al viejo tronco, dirigido ahora por Alvear. El Partido Socialista Independiente solo podía ofrecer una base sólida en la Capital, y también un grupo calificado de dirigentes. Este conglomerado se unió tras la figura del general Justo, pero sin superar sus diferencias, al punto de que lo apoyaron con dos candidatos a vicepresidente distintos.

Justo —pieza central de esta alianza— podía presentarse como un militar con vocación civil, pero sobre todo como quien contaba con el respaldo del Ejército. Desde el 6 de septiembre libró una guerra sorda con Uriburu por el control de los mandos principales, y salió triunfante. Su más fiel sostén, el coronel Manuel A. Rodríguez, no solo mandaba Campo de Mayo sino que fue electo presidente del Círculo Militar, lo que atestiguaba el estado de ánimo predominante en la institución. Los oficiales eran reclamados por diferentes grupos de activistas: los radicales, embarcados en conspiraciones, los nacionalistas, igualmente activos, y los adeptos a Justo, que unían las banderas del constitucionalismo con las del profesionalismo; pero en el grueso de ellos predominaba todavía la desconfianza hacia la política y una postura básicamente profesional que inclinó la balanza en favor de Justo.

Luis Alberto Romero
Breve historia de la Argentina

El mes de octubre transcurrió colmado de intrigas y conciliábulos. Alvear renunció a su postulación para no convertirse en un obstáculo a su partido y desde Río de Janeiro, donde se encontraba desde su expulsión del país, se trasladó a Montevideo para seguir de cerca los acontecimientos. Se rumoreó que el gobierno de facto aceptaría la participación radical en los comicios si el candidato fuera Vicente Gallo o Fernando Saguier. Se dice que Yrigoyen, desde Martín García, habría aconsejado no abroquelarse en posiciones irreductibles. Pero la UCR, partido al que el poder legítimo le ha sido arrebatado por la fuerza, no podía aceptar negociaciones. El 12 de octubre se reúne nuevamente la Convención Nacional y por aclamación rechaza las renunciaciones de Alvear y Güemes, ratifica sus nombres, denuncia el escamoteo del triunfo de abril e instruye al Comité Nacional para que declare la abstención si se mantienen las condiciones impuestas por el gobierno. Así, después de nuevas y febriles gestiones y habiendo comprobado que la decisión de Uriburu era irrevocable, el 27 de octubre se proclama la abstención de la UCR en los comicios de noviembre. La fuerza mayoritaria no estará presente en los comicios presidenciales, con lo cual el pronunciamiento electoral resultará absolutamente viciado.

El 8 de noviembre de 1931 se realizaron los comicios. Hubo graves incidentes en Buenos Aires y Mendoza. La Concordancia obtuvo unos 600.000 votos, y algo menos de 500.000 la Alianza Civil. El 7 de enero de 1932 el gobierno de facto aprobó por decreto la elección y el 20 de febrero, aniversario de la batalla de Salta, Uriburu entregó el mando al nuevo presidente.

Esa misma noche, una versión corrió por Buenos Aires. ¡Yrigoyen había vuelto! En efecto, beneficiado por un indulto del gobierno de facto dictado el último día, el cautivo de Martín García había sido trasladado en un guardacostas y desembarcado en la dársena norte. Fue llevado a la casa de un sobrino, en la calle Sarmiento entre Suipacha y la cortada Carabelas. Rápidamente se congregaron allí algunos miles de personas que vivaron al caudillo y dieron muertas a Uriburu y Justo. Fue la única expresión popular de aquella jornada, cuando el dictador, enfermo y derrotado, transfirió el poder al nuevo presidente. En un breve discurso había recomendado a Justo las reformas constitucionales que lo habían obsesionado; el nuevo mandatario le aseguró que tomaría con el mayor empeño las sugerencias y, desde luego, olvidó el tema para siempre...



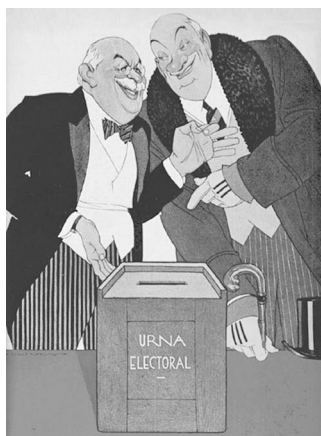
En primera fila, entre otros, Nicolás Repetto, Juan B. Justo, Mario Bravo, Silvio Ruggieri y Enrique Dickmann.

EL SALDO DE LA DICTADURA

Si hubo alguien que hizo una revolución para beneficio de otros, este fue el general José Félix Uriburu. Fue un instrumento de la astucia política de los conservadores y, sobre todo, de Justo. Se resignó a ser rodeado por quienes estaban en las antípodas de sus ideales. Un hombre a quien íntimamente admiraba, De la Torre, terminó siendo su principal oponente. Los jóvenes de ideología fascista que lo acompañaron en las vísperas de la revolución fueron posteriormente alejados del poder.

Durante el año y medio de su gestión los problemas económicos y sociales aumentaron, creció la desocupación y aparecieron «villas miseria» en distintos puntos de las grandes ciudades. Uriburu no pudo realizar la reforma del Estado que se había propuesto, y solo logró implantar impuestos a los réditos y a las transacciones, así como una forma de control de cambios. Las conquistas de la Reforma Universitaria fueron abolidas y volvió a las universidades la más cruda reacción, promovida por una oligarquía profesoral que se correspondía con la que se aprestaba a manejar el país.

La lección era clara, pero no se aprendió en el momento: un poder ilegítimo es siempre un retroceso. Muchos años más tarde, un dirigente conservador, José Aguirre Cámara, y un oficial que participó



Caricatura de Caras y Caretas titulada «Urna electoral».

en la revolución, Juan Perón, renegaron de su actuación en el movimiento de septiembre. Pero la quiebra de la continuidad constitucional era un hecho. En cuanto a su protagonista, dos meses después de haber entregado el poder fallecía en París.